



Medellín

Violencia Urbana: Territorio Y Hábitat

Luis Guillermo Pardo C.* & Édinson Muñoz Ciro**

Síntesis

El territorio urbano en Colombia se consolidó fundamentalmente a partir del conflicto nacional acaecido luego del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán a mitad del siglo pasado y fue configurado a lo largo de las siguientes décadas por una población sometida a los efectos cada vez renovados de la violencia. El texto se centra particularmente en el caso de la ciudad de Medellín e intenta aportar algunos elementos de proyección para la acción social y política con el fin de contribuir, a partir de la reflexión, a la construcción de salidas al conflicto desde la perspectiva de una gestión integradora del territorio urbano.

Palabras clave

Urbanismo social, conflicto urbano, manejo territorial, violencia transgeneracional, marginación, narcotráfico, microtráfico, seguridad, educación, convivencia ambiental.

Medellín Urban Violence: Territory and Habitat

Abstract

The urban area in Colombia was consolidated since the national conflict that occurred after the assassination of Jorge Eliécer Gaitán in the middle of last century and was set up over the decades by a population under the growing impact of renewed violence. The text focuses particularly in the case of Medellín and tries to bring some elements of screening for social and political action in order to contribute, after reflection, to build solutions to the conflict from the perspective of an integrated management of urban land.

Key Words

Social urbanism, urban conflict, territorial management, transgenerational violence, marginalization, drug trafficking, micro-traffic, security, education, living environment

*Sociólogo urbano, profesor universitario, analista de crisis, conflicto y contexto internacional

luisguillermopardo@gmail.com

**Biólogo. Magister en Bosques y Conservación Ambiental. Director Fundación Con Vida y Revista Ambiental ÉOLO.

edimciro@gmail.com

El conflicto colombiano y su incidencia en el crecimiento urbano



El conflicto que actualmente conocemos tiene sus antecedentes en la década de 1950, periodo en el que surgen profundas contradicciones al interior de la élite en el poder.

Estas contradicciones degeneran en una confrontación violenta entre los dos partidos tradicionales que aún hoy tienen una fuerte incidencia en la vida política del país. En esa misma época se forman los primeros grupos guerrilleros liberales en territorios del Cauca, Tolima, Huila, Valle, Llanos Orientales, Urabá Antioqueño y en el páramo de Sumapáz, en Cundinamarca. Estos movimientos de guerrilla provocan una fuerte reacción del gobierno colombiano a través de lo que se conoce como la ofensiva conservadora chulavita, la cual se prolongó durante el denominado periodo del Frente Nacional.

El conflicto colombiano marca tanto el territorio rural como urbano al provocar un desplazamiento masivo de poblaciones hacia las ciudades. El crecimiento acelerado de la ciudad es básicamente producto del conflicto que afectó las áreas rurales del país,

devastadas y empobrecidas por la violencia sistemática agenciada por los dos partidos tradicionales. Ante esta crítica situación, oleadas de habitantes del campo migraron a las ciudades, esperanzados por las posibilidades ciudadinas de mejorar las condiciones de vida de sus familias. En todo el país, las ciudades se poblaron de manera acelerada, dando lugar a la formación de las comunas. Así en Medellín, este fenómeno dio origen a las comunas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 13.

El conflicto constituyó entonces la primera causa de la urbanización en Colombia y transformó totalmente la realidad poblacional del país. El departamento de Antioquia en particular pasó de tener el 70% de su población rural y el 30% urbana en la década de los años 50, a tener un 70% de pobladores urbanos y un 30% de habitantes rurales en los años 80 y 90, invirtiendo la relación entre campo y ciudad. Desde entonces, la población antioqueña, mayoritariamente urbana, se estuvo concentrando en su capital, poblada esencialmente sobre la base del desplazamiento violento de habitantes del campo.

Veamos algunos datos estadísticos que ilustran este proceso: En 1938, la población de Medellín era de 168.000 habitantes; en 1951, se había duplicado para alcanzar 358.189 habitantes, con base en una tasa de crecimiento del 5.8%; para 1964, la población había doblado una vez más, llegando a 772.887 habitantes con una tasa espiral del 6.9%; en 1973, los pobladores eran 1.151.762, creciendo con una tasa del 4.6%, cuando la del departamento era del 2.5%; en 1985 los habitantes de la capital paisa eran 1.473.762 y hoy se cuenta en Medellín alrededor de 2.500.000 habitantes.

A partir del dramático proceso de expulsión del campo, el poblamiento urbano se posicionó como una causa *per se*. El territorio urbano está asociado a un estilo de vida consumista y a un modelo de desarrollo altamente competitivo, excluyente e inequitativo, pero igualmente atrayente para las poblaciones de los territorios rura-

les, sumidas en condiciones de vida precarias, con servicios sociales muy limitados y defectuosos, al contrario de lo que acontece en los espacios urbanos, donde incluso hay superávit de oferta en servicios públicos, educación, salud y una muy amplia gama de mercancías y oportunidades económicas.

En el contexto de la conformación del territorio urbano en Medellín, es necesario señalar el rol estimulante de la industrialización desarrollada a partir de los excedentes generados por la caficultura y la minería del oro. La vocación industrial que hizo de la capital de Antioquia un centro empresarial de escala nacional en producción textil, petroquímica, metalurgia e industria automotriz, entre otras, permitió el mejoramiento de la infraestructura, incrementó y diversificó las ofertas sociales, recreativas y laborales, con lo que afianzó el capitalismo y contribuyó al robustecimiento del mercado fundamentado en la capacidad de consumo de la población.

Sin bien el poblamiento masivo de Medellín fue producto del conflicto y de la violencia que azotaron al país, la consolidación del modelo de desarrollo industrial y el capitalismo constituyeron una segunda causa del crecimiento desbordado y marginado del territorio urbano. En Antioquia fue otro factor que, en su momento, atrajo a una pequeña porción de la población rural hacia la capital Medellín; espejismo que sin embargo desapareció en la década del 90, cuando las élites gobernantes y la dinámica del capital internacional y especulativo transformaron la vocación de Medellín de industrial a servicios, con altas realidades de informalidad laboral y escasa productividad. De la noche a la mañana, Medellín se volvió "turística", lo cual se asoció a una buena estrategia de "city marketing" y de turismo de "riesgo", de drogas y de sexo.

La configuración de la ciudad en la segunda mitad del siglo XX

En tan sólo veinte años, Medellín experimentó un crecimiento aterrador, espontáneo y descontrolado. Los territorios urbanos, conformados o masificados a partir del conflicto de los años 50, fueron configurados por las sucesivas olas de violencia y marcados por una alta conflictividad social, el marginamiento, la pobreza, la falta de oportunidades y la exclusión. Estas características tuvieron influencias e incidencias obvias sobre el territorio de una ciudad que seguía transformándose de ámbito rural a espacio mayoritariamente urbano.

Desde los años 50, los desplazados rurales que habían llegado a Medellín se habían instalado en las laderas de las montañas a través del loteo pirata y la invasión de terrenos, sin ninguna planeación o estrategia de desarrollo urbano, lo que produjo asentamientos hacinados, marginados y excluidos del desarrollo.

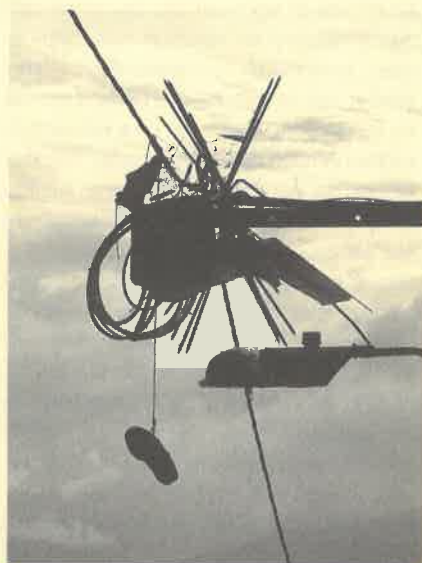
Frente a este proceso de poblamiento acelerado, producto del terror y marcado por un profundo desorden,

la acción del Estado fue muy tardía, descoordinada, cortoplacista y remedial, con el único objetivo de paliar y contener las consecuencias de las adversas condiciones sociales generadas antes, durante y después del conflicto. No se evidenció una acción clara del Estado para organizar el territorio, construir hábitats dignos o comprometerse de manera decidida con el bienestar y la seguridad de la población, a pesar de lo propuesto en los años 60 para implementar el plan de organización de la ciudad estructurado por la comisión internacional liderada por Sersi Stipes.

Lo que se observó fue una gran debilidad estatal en la gestión del territorio; ningún plan funcionó, ninguna estrategia fue coherente y la consecuencia fue un proceso de urbanización del territorio de Medellín completamente espontáneo, incontrolado y caótico, impulsado por una comunidad motivada por el único interés de satisfacer su necesidad de poblar y sobrevivir. Al igual que otras ciudades de Colombia, la capital antioqueña se configuró, según los términos de Castells y Sassen, como CIUDAD DUAL, polarizándose en zonas consolidadas y zonas marginadas, con grandes hechos de exclusión y desigualdad; es en estas últimas donde se observa la mayor densidad y expansión poblacional.

En las décadas de los 60, 70 e incluso 80, abundaron las invasiones de terrenos dirigidas por grandes personajes, muchos de ellos curas, algunos del grupo "Golconda" formados en la "teología de la liberación" (la misma del cura Camilo Torres); algunos de estos "curas revolucionarios" fueron luego comandantes del ELN y, en mucha menor medida, militantes del M-19, el EPL y las FARC.

Vale decir que la izquierda en Medellín creció al calor de las invasiones de territorios públicos y privados. Eran los tiempos en que la ubicación de la bandera de Colombia significaba la seguridad para el nuevo poblamiento, pues le impedía a la fuerza pública tomar por la fuerza ese espacio, lo que casi siempre sucedía hacia la media





noche y el amanecer. Por ello, era muy claro para los invasores que lo primero que había que tener era el terreno a invadir y la bandera de Colombia. Estos acontecimientos constituyen uno de los hitos de la conformación de la ciudad.

Esta configuración de la ciudad se dio sin ningún tipo de respeto hacia el medio ambiente, ni asomo de conocimiento o conciencia en torno a la naturaleza. En las condiciones de precariedad causadas por el conflicto y la pobreza, es previsible que la dimensión ambiental en la construcción de la ciudad no haya representado ningún interés para las poblaciones que la conformaron, lo cual se reflejó en la construcción de viviendas en zonas de alto riesgo, sin criterios técnicos y con materiales inadecuados, en la afectación severa de los afloramientos y cursos de agua y se revirtió en la muy notoria vulnerabilidad del territorio y de sus habitantes.

Pero en ese periodo, ni siquiera los gobiernos locales o nacionales dimensionaron los efectos de la acción y crecimiento del capital global y nacional sobre el medio ambiente, ni previeron los impactos del desarrollo caótico de la ciudad y del uso de energía no renovable como el petróleo, el carbón y el gas sobre los ecosistemas y la biodiversidad.

El conflicto urbano en Medellín en los años 80

Para puntualizar la relación entre territorio urbano y conflicto en Medellín, es necesario tener siempre presente la conformación agresiva, marginada y dualizada de las comunas más populares de la ciudad, protagonistas del afianzamiento del narcotráfico, del fortalecimiento urbano de las guerrillas y proclives al crecimiento de la demanda propia del modo de vida capitalista. A partir de los años 80, la sinergia entre los anteriores factores complejizó y maximizó un pavoroso conflicto urbano en esta ciudad, prota-

gonizado por dos actores: los grupos, bandas y pandillas delincuenciales al servicio del narcotráfico de un lado, y los grupos milicianos formados al calor de una negociación de paz entre el gobierno nacional y el EPL, las FARC y el M-19, del otro. Así, la década de los 80 fue fundamental para la estructuración del conflicto urbano en la ciudad de Medellín.

En estos años, se estaba consolidando muy silenciosamente la organización del narcotráfico alrededor de las figuras de los capos Pablo Escobar y González Gacha, socios y amigos, que contaban con liderazgo social y político y fuertes nexos empresariales. El modelo capitalista, con su constante apología al dinero, ha creado en Colombia un marco ideal para el narcotráfico, alimentando su voracidad de riquezas. Favorecidas por un territorio con estratégica posición geográfica, variedad climática y vocación agrícola y empresarial, las organizaciones que realizan esta actividad ilícita se han posicionado como detentoras de incommensurables sumas de dinero.

El narcotráfico, desde allí, ha sido efecto y causa en sí mismo de la dinámica urbana en Colombia y ha incidido de una manera atroz en la configuración del conflicto urbano. La narcoactividad implica necesariamente la conformación de grupos armados sicariales al servicio de los amos del narcotráfico para resolver sus diferencias, garantizar sus ganancias y defender sus intereses. La consecuencia es la consolidación de una estructura delictual financiada que coexiste con el acontecer cotidiano de los barrios marginados de la ciudad de Medellín.

Simultáneamente en esa época, como consecuencia del proceso de negociación y cese de hostilidades iniciado en 1982 con las guerrillas de las FARC, el EPL y el M-19 bajo la presidencia de Belisario Betancur, se consolidó una fuerte presencia de estas organizaciones subversivas en los espacios urbanos, particularmente en las comunas nororiental y noroccidental de la ciudad de Medellín, donde se

estructuraron a partir del establecimiento de "Campamentos de Paz". A través de los Campamentos, estas guerrillas cooptaban pobladores para aportar información y generar debate acerca de las condiciones de pobreza y marginamiento que se vivían en las comunas, pero a la vez, impartían algún tipo de instrucción militar; posteriormente, una vez rotos los diálogos de paz, fueron la base de la conformación de estructuras militares milicianas clandestinas.

Con esta estrategia, se masificó la presencia guerrillera en la ciudad bajo la forma de milicias y estos movimientos volvieron a la guerra total con una mayor capacidad de ataque. Este esquema se desarrolló paralelamente en otras ciudades del país, donde se conformaron milicias muy fuertes en zonas complejas que aún hoy asientan el conflicto urbano; es el caso de la ciudad de Cali, en sectores como Agua Blanca y Siloé, y de Bogotá, con los sectores de Kennedy, Simón Bolívar y Altos de Cazucá.

En Medellín, las milicias tomaron la figura de "Milicias del Pueblo y para el pueblo" con una estructura militar cercana a 450 milicianos urbanos. En 1994, sus integrantes negociaron la reinserción a la vida civil con la administración Gaviria, pero previamente desarrollaron una feroz guerra con las bandas y pandillas del narco que azotaban, con vacunas, extorsiones y homicidios, la vida y estructuras comunitarias de las comunas marginadas de las laderas de Medellín.

La situación de Medellín dentro del contexto nacional era *sui generis*, pues todos los grupos se radicalizaron en la ciudad debido a que, a diferencia de otros departamentos, las diferentes guerrillas eran fuertes en Antioquia: EPL, FARC, M-19 y ELN. Al fin y al cabo, una fracción del EPL surgió en este departamento donde el médico "revolucionario" Tulio Bayer tuvo una notoria incidencia y las FARC utilizaron la guerrilla liberal creada por el "mocho" Franco, en la zona de Urrao,

Pabón, todo el occidente antioqueño, donde aún opera el bloque José María Córdoba, y el Chocó.

En síntesis, en la década del 80 y a principio de los 90, durante el periodo de los gobiernos de Belisario Betancur, Virgilio Barco y Cesar Gaviria, se configuran los actores y el territorio que hoy protagonizan el conflicto urbano; vemos que ya es normal registrar al final de esta década guerras entre bandas asociadas al narcotráfico y de éstas con las milicias creadas por la guerrilla.

El conflicto urbano en Medellín en los años 90

La *explosión* ocurrió en los 90 con una guerra muy fuerte entre pandillas y milicianos, es decir entre sectores de derecha e izquierda, ya que el narcotráfico se había aliado con algunas instituciones del Estado y estaba contribuyendo a la gestación de una nueva versión del paramilitarismo que entró a operar con fuerza en el conflicto urbano en la ciudad de Medellín.

Las comunas más afectadas por este fenómeno fueron las 1, 2, 3 y 8, con impactos en las comunas 5, 6 y 7, así como en el sector de Moravia y luego en la comuna 13 donde se agudizó la guerra hasta llevar a una intervención a gran escala en el primer periodo del presidente Álvaro Uribe para resolver un conflicto que aún hoy está vigente.

Con el fortalecimiento de las estructuras delincuenciales, se inició en Medellín, una guerra microterritorial en la década del 90, guerra de la que poco se habla y que se asocia al microtráfico, uno de los negocios del narcotráfico que se lleva a cabo en las plazas de vicios y con el cual las autoridades quieren tapar el verdadero problema del macrotráfico. Esta guerra se llevó con actores ilegales que habitaban una ciudad partida, excluyente y que generaba una inmensa desigualdad. Se radicalizó con Pablo Escobar y la formación del MAS (Muerte a Secues-

tradores), cuando el capo de la mafia entró en confrontación con la guerrilla del M-19 al lado de los extraditables, luego del secuestro de Marta Nieves Ochoa, hermana de los hermanos Ochoa, asociados en su momento con Pablo Escobar; este hecho generó la reacción del narcotráfico que, en alianza con fuerzas del *establecimiento*, persiguió a los guerrilleros, masacró las estructuras del M-19 y configuró una nueva oleada del paramilitarismo en Colombia.

Con la muerte de Pablo Escobar a manos de los llamados PEPES (perseguidos por Pablo Escobar) y conformados por una explosiva mezcla de narcos, agentes de la fuerza pública y agentes norteamericanos, se creó una nueva versión del paramilitarismo en Colombia; se desconcentró el narcotráfico y comenzó un nuevo episodio del conflicto interno y de la guerra urbana en Colombia. Ya no lideraban los capos de la mafia, sino que surgieron muchos jefes en toda la geografía colombiana; se democratizó el negocio del narcotráfico que siguió siendo un negocio lucrativo de gran envergadura. En el combate que llevó a Pablo Escobar a su derrota, fue crucial la participación de los PEPES que, con el grupo del MAS, permearon el establecimiento al crear alianzas de todo tipo con empresarios y funcionarios del Estado. La confluencia de actores ilegales fuertes y organizados con el *Establecimiento*, representado en diversos miembros de la fuerza pública, llevó a que los militares participaran abiertamente en las acciones del MAS y de los PEPES; así, se validó la propuesta de actuación, jalonada desde la ilegalidad, que favoreció la participación de oficiales de la policía y del ejército como comandantes de las autodefensas y jefes muy activos de los narcotraficantes. Con estas alianzas se formó una nueva clase de narcotraficantes de la cual Don Berna, un antiguo ex colaborador del EPL, es el más reconocido. Este proceso fue liderado por los hermanos Castaño Gil, Fidel, Vicente y Carlos, quienes conformaron grandes estructuras militares ile-

gales, conocidas en un principio como ACCU (Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá) y posteriormente como AUC (Autodefensas Unidas de Colombia).

Paralelamente, a principio de la déca-



da del 90, se desarrolló, como hecho político histórico, el proceso de la constituyente que permitió consolidar el proceso de paz realizado con el M-19 y el EPL. Pero al mismo tiempo, se bombardeaba el santuario histórico de las FARC en Casa Verde y se perdía todo contacto con el ELN; este grupo se rompió en dos vertientes, la fuerza tradicional que hoy permanece en armas, y la Corriente de Renovación Socialista que luego negociaría un proceso de paz. Lo claro es que en la guerra simplemente cambiaron actores y procedimientos, pero el conflicto sigue vigente en Colombia, tanto en el campo como en la ciudad.

Esta época fue muy caótica para la ciudad de Medellín. En este proceso se desmovilizaron en Medellín aproximadamente 550 milicianos de varias estructuras, que luego se enemistaron y se mataron entre ellos, amparados por una irregular negociación que permitía que los desmovilizados permanecieran armados y ejercieran seguridad en sus barrios de origen; así, se dieron disputas por acceder a los recursos del Estado y por celos y conflictos internos de poder. Este proceso de paz es uno de los más fracasados que se haya desarrollado en Colombia; este fracaso obedeció a la inercia de los acontecimientos generados por la conformación de milicias guerrilleras que poco a poco se transformaban en milicias independientes y finalmente,

cuando feneció el proceso de politización, se convirtieron en delincuencia común organizada y armada.

Ante esta escalada de la violencia, debida a la reorganización de la delincuencia en la ciudad, el gobierno de César Gaviria tomó la decisión trascendental de establecer la Consejería Presidencial para Medellín y el Área Metropolitana con el propósito de desactivar la guerra en los barrios de la ciudad, desde la legalidad del Estado y a través de la inversión social y de la aplicación de políticas de inclusión. Durante la alcaldía de Luis Alfredo Ramos, actual gobernador de Antioquia, esa consejería propició la creación del cargo de Asesor de Paz. En la alcaldía de Sergio Naranjo, se le dio mayor institucionalidad al cargo y se estableció la Asesoría de Paz y Convivencia que permanecería durante los dos siguientes periodos de administración municipal. El co-autor del presente artículo fue el último asesor de paz y convivencia de Medellín en la segunda alcaldía popular de Juan Gómez Martínez. Buscó atender el conflicto urbano desde la civilidad y la democracia, a través de las mediaciones y de los pactos de no agresión y convivencia, para lo cual fue necesario dialogar con los últimos jefes militares de las milicias que apoyaban al ELN y al M-19 en la ciudad de Medellín; en ese caso el diálogo se dio con "las Milicias 6 y 7 de noviembre" que reivindicaron con ese nombre la fecha en que la organización guerrillera que apoyaban se tomó el Palacio de Justicia en Bogotá. El epicentro de esta milicia era La Sierra, el último barrio de la comuna 8, a 10 minutos del centro de Medellín. Igualmente se adelantaron diálogos con las milicias ubicadas en las comunas 1 y 2, 5 y 6 y en la comuna 13, los cuales fueron abortados cuando la alcaldía de Luis Pérez Gómez desmontó la Asesoría de Paz y Convivencia de Medellín en el año 2001.

La evolución del conflicto urbano en la década del 2000-2010

El devenir de las milicias activas en Medellín es algo común de la mayoría de las estructuras creadas por la guerrilla desmovilizada o desplazada del territorio; estos grupos se transformaron en organizaciones delincuenciales que vendieron sus servicios al mejor postor, hasta transformarse en baluartes ilegales del Bloque Paramilitar Metro, comandado por "Doble Cero", que controlaba muchos barrios de la ciudad y una gran cantidad de municipios del área metropolitana, el oriente, el nordeste y el norte antioqueño. Lo más complejo en Medellín ha sido la connivencia total de estas fuerzas ilegales con el Estado a través de un pacto de *facto* con el paramilitarismo, para formar una mezcla explosiva que hoy pervive en el territorio, a pesar de la masiva desmovilización paramilitar que se llevó a cabo en el primer gobierno de Álvaro Uribe Vélez.

La Asesoría de Paz y Convivencia de Medellín fue clausurada en enero del 2001, año en el cual las estructuras ilegales del nuevo paramilitarismo se volvieron hegemónicas en Medellín y en el Área Metropolitana. Se evidenció a partir de entonces una simbiosis definitiva entre el paramilitarismo y el narcotráfico de última generación, cuyos cabecillas fueron luego extraditados a Estados Unidos, confirmando el proceso de dominación del narcotráfico sobre las estructuras paramilitares en Colombia.

En esta época, se desataron luchas a muerte entre bandas y facciones, como aconteció entre el bloque Metro al mando de "Doble Cero" y los bloques Cacique Nutibara y Héroes de Granada al mando de "Don Berna". Estas luchas resultaron con la muerte de jefes paramilitares a manos de sus mismos compañeros, como fue el caso de "Doble Cero", ultimado en Santa Marta luego de que fue arrasado el Bloque Metro, o de Carlos Castaño abatido por sus propios compañeros.

Lo que acontece hoy es una total narcotización de las pandillas delincuenciales en las ciudades de Colombia, a lo que se pueden añadir actividades de raponeo, fleteo, vacunas y extorsiones, así como de microtráfico. Se evidencia en estos centros urbanos un gran dominio de los grandes y medianos narcos sobre las pandillas delincuenciales, en particular en Medellín, que incluye el control del microtráfico de estupefacientes. A las bandas, se les da autonomía para extorsionar terminales de transporte, buses, busetas y microbuses; controlan muchos barrios así como el centro de la ciudad donde las Convivir siguen siendo la mejor expresión de esta dominación. Los esfuerzos de la policía para controlar estos actos violentos son insuficientes y dan cuenta de grandes vacíos expresados en una alta impunidad y corrupción.

En el año 2002 se inició un periodo muy complejo para la ciudad, marcado por la Operación Orión que, supuestamente, tenía como intención controlar la violencia en la Comuna 13. Este evento corresponde posiblemente a la mayor intervención militar realizada en un espacio urbano en Colombia. Sin embargo, los muy elevados costos humanos y económicos en los que se incurrió fueron inefectivos, ya que actualmente esta comuna, a pesar de la militarización vigente, presenta la más alta conflictividad en la ciudad. Esta experiencia obliga a reflexionar sobre el marco en el que se construyó y efectuó la Operación Orión, sus reales resultados, secuelas y consecuencias.

En el primer gobierno de Álvaro Uribe, se realizó la negociación de paz con los grupos paramilitares. En el año 2003, se desmovilizó en Medellín el Bloque Cacique Nutibara conformado por aproximadamente 870 personas que incidían con ferocidad en la vida cotidiana de muchos barrios de la ciudad. Con esta experiencia se consolidó en el país un modelo de seguridad compartido entre la legalidad y la ilegalidad, que luego se rompió en parte con la extradición de los jefes parami-

litares. La ausencia de los jefes desarticuló las estructuras organizadas delictivas y propició la multiplicación de bandas que, aún hoy, luchan por el control territorial. En consecuencia se elevó el nivel de delincuencia y la violencia en todo el Valle de Aburrá, sumiendo la sociedad en la indefensión. El gobierno local no pudo atender adecuadamente el conflicto urbano, pues no contó con las suficientes herramientas legales y legítimas para acometer con éxito el problema, a pesar de la existencia de un marco jurídico que penaliza la delincuencia, incluso de los menores de edad.

Debido a la carencia de una clara política de paz social, se siguen librando muchas guerras en Colombia, una de las cuales, la de la ilegalidad, es también la expresión violenta de la pobreza y la exclusión democrática. Participamos de una ciudad que construye, generación tras generación, actores violentos del conflicto urbano, pues en la ilegalidad delincencial y en la guerra del narco, las jefaturas se reemplazan muy fácilmente¹. Esto explica la rápida renovación del liderazgo entre los narcos; así, los dos jefes más renombrados en la actualidad (Valenciano y Sebastián) tienen alrededor de 30 años de edad, eran adolescentes en el 2000 y hoy tienen una gran capacidad y poder intimidatorio.

Con seguridad, en los barrios de Medellín se encuentran muchos adolescentes que, por sus frustraciones y aspiraciones, son potenciales 'Valencianos' y 'Sebastiánes', así como adultos que traman y esperan la realización de un negocio ilícito que, por su baja magnitud, aún no afecta a las grandes estructuras criminales.

Como ejemplo sintomático de esta triste realidad urbana, de cientos y cientos de jóvenes asesinados en los barrios pobres de Medellín (¿será que por ser pobres poco importan?), veamos las cifras de los homicidios reportados en la ciudad durante los últimos años: en 1999: 3.136 homicidios; en 2000: 3.052; en 2001: 3.329; en 2002: 3.557; en 2003: 1.896 (año de la desmovilización del bloque Cacique Nutibara AUC); en 2004: 1.141; en 2007, 788; 2008; 1.066 (año de la extradición de los jefes autodefensas); 2009: 2.186 y entre enero y octubre de 2010 son un poco más de 1.500 homicidios.



Impactos del conflicto urbano en la configuración de la ciudad de hoy

Los enfrentamientos y confrontaciones entre bandas en los barrios de Medellín y entre pandillas del narcotráfico y milicias son característicos de esta ciudad y denotan la existencia de territorios con límites invisibles en los sectores populares de la ciudad de hoy. Ello nos permite afirmar que un aspecto fundamental de Medellín es ser una ciudad construida desde la partición y la división, configurada desde muros invisibles, incluso entre los mismos sectores marginados del nororiente, noroccidente, centro-oriente y centro-occidente, carente de conectores transversales urbanos. Estos muros invisibles hoy se marcan con círculos rojos en los postes de energía, como advertencia de los actores del conflicto urbano para que no se pase esa señal, so pena de ser asesinado.

Pero Medellín presenta otra desconexión, esta vez estructural, entre sectores sociales: así, existe una aguda división entre el norte y el sur de la ciudad, marcada por la diferencia en todo sentido entre una comuna como el Poblado y comunas como la 1, 2, 5, 6, 7, 8 y 13. Esta acentuada división implica una alta desigualdad y segregación social. Medellín es una ciudad autoexcluida y excluyente de una vasta parte de su población que sobrepasa el millón de pobladores. Actualmente, más de la mitad de sus habitantes viven en un territorio olvidado, donde prima la desigualdad y la pobreza.

El poblamiento marginado y con altos signos de segregación estigmatiza negativamente a los pobladores como excluidos del orden social, del desarrollo y de una ciudad que perdió su vocación industrial en su afán de transformarse en ciudad de servicios. En estas condiciones, así los arcángeles de la teoría social del capitalismo digan que la precaria situación social no es una causa del conflicto urbano, jóvenes excluidos asumen como única opción de vida digna y como camino para ganar respeto, tener autoestima y sentirse sujetos de ciudad, usar las armas y concursar en lo ilegal; de esta forma, logran conseguir la plata que se requiere no sólo para sobrevivir, sino para replicar el modo de vida de los jóvenes de los estratos pudientes que habitan El Poblado, Laureles y otros sectores privilegiados, por ejemplo, a través del uso de tenis, camisas, chaquetas, carros y motos de marca.

Lo claro es que los jóvenes excluidos también tienen derecho al consumo ostentoso. Pero mientras los unos recurren a la legalidad y a la explotación económica, otros acuden a la ilegalidad para satisfacer ese deseo.

Al inicio de este artículo se planteó que el modelo de vida consumista del capitalismo es una de las causas que alimenta el conflicto urbano. Para explicar por qué un joven se vuelve sicario, se alude comúnmente a los altos niveles de violencia intrafamiliar,

a la deserción escolar, la ausencia del padre en hogares donde las mujeres cabezas de familia asumen toda la carga del cuidado y educación de los hijos, los cuales dejan durante el día para ir a trabajar en el oficio que logren conseguir, aunque sea el de la prostitución. En condiciones de vida tan adversas, no debe sorprender que ciertas personas encuentren en la ilegalidad opciones para sobrevivir y realizar sus aspiraciones.

Estas nefastas condiciones, en un contexto de poblamiento urbano espontáneo y anarquizado, explican el crecimiento desbordado de la informalidad en Medellín como consecuencia del desempleo y de la falta de oportunidades legales para generar ingresos. En efecto, la industria nunca generó pleno empleo para la población y menos aún lo generará el sector de los servicios, debido a sus muy específicos requisitos de clase, entre otros educativos, que excluyen una vez más a vastos sectores de la población de todas condiciones y edades.



Impactos de la violencia en la vida social y política de la ciudad

La democracia, en vez de explayarse, se estrecha cada vez más con el crecimiento de la violencia y de la pobreza. Los votos se han valorado mucho en los últimos años y la corrupción electoral es cada vez más monstruosa. Parece ser que la condición fundamental para tener éxito como candidato electoral es contar con el dinero suficiente

para pagar la participación del electorado. En consecuencia, las campañas cada día valen más y más y, en igual medida, las opciones para el logro se circunscriben a las posibilidades estrechas del dinero. De manera increíble y paradójica, la vía democrática electoral se convierte en la peor trampa antidemocrática y excluyente de poder. El dinero que aporta el narcotráfico, unido a la pobreza, corrupción e impunidad, marginamiento y exclusión, constituyen la llave indisoluble de la que dependen los grupos armados ilegales para proyectar su lucha hacia el futuro, ya que, los niveles de protección de los grandes capitales han aumentado significativamente por la conexión con los emporios globales, así como de los empresarios y políticos que otrora constituían sus víctimas privilegiadas.

Tal vez una explicación de la impasibilidad prevaleciente que impide la conmoción social frente a la guerra y sus impactos, es la preeminencia de una fascinación hacia el escándalo, pues de manera consuetudinaria, el interés colectivo salta de un tema a otro, semana tras semana, día tras día. Hoy la opinión pública está cautivada por las mujeres sicarias, ayer, por el fiscal narcoparamilitar, mañana, por el problema de los cayos oceánicos, más tarde, por la desviación de multimillonarios subsidios otorgados a los empresarios agropecuarios que apoyan al candidato presidencial del gobierno nacional de turno al mismo tiempo, se deja conmover por los falsos positivos y a la mañana siguiente por las chuzadas ilegales del DAS o por el cierre de fronteras con países vecinos causado por el mal manejo internacional del conflicto, retienen la atención, de la misma manera, un asesino que habla sin pudor del homicidio de su bebé para acceder a un seguro pírrico y la masacre de cien labriegos, entre miles de desplazados por batallones irregulares e ilegales. Luego de diez mil veces, es la gente anodina del campo, siempre olvidada, la que sufre, así como la siempre

explotada gente de la marginada zona de algún barrio, de ninguna parte y de todas partes.

Y así transcurre la cotidianidad de Colombia. Tal vez por ello, los medios de comunicación consideran que, más que denunciar los hechos de corrupción y las violaciones de los derechos, su labor consiste en maquillar la realidad y la indolencia con la hermosura de la farándula y la superficialidad que nada resuelve, con el marketing político y la mejora de la imagen que permite sumar puntos en una encuesta; tal vez por ello, se banaliza el nuevo rumbo que toma la guerra en Medellín, con la reincorporación de las bandas, pandillas y combos al conflicto urbano o su re-conexión con la ilegalidad; y se oculta la realidad del hambre y de la violencia que siguen actuales en campos y ciudades, la realidad de esta tierra manchada de miedo, terror cotidiano y sangre.

La gestión integradora del territorio como gestión del conflicto urbano en Medellín

La permanencia del conflicto urbano expresa la carencia de una política pública de paz fundamentada en la inversión social que permita resolverlo desde sus raíces. Este camino requiere que se neutralicen las ofertas que provienen y se alimentan de la ilegalidad y responden a la necesidad, para una gran cantidad de jóvenes excluidos de la economía formal, de encontrar alternativas para la sobrevivencia y el reconocimiento.

Actualmente, la ciudad no cuenta con una institucionalidad de paz que abra las puertas a la legitimidad, al diálogo y la reinserción seria y transparente. Hoy, en asuntos de paz, ¡la ciudad se va al garete! y más bien se juega “al maquillaje” y al “city marketing” como únicas soluciones; pero es sin contar

con las cifras que revelan la verdadera realidad, la cual no puede ser ni maquillada, ni escondida.

Lo claro es que Medellín aún es una ciudad que sigue sin un manejo integral del territorio; apenas se están empezando a realizar inversiones serias orientadas hacia los espacios urbanos dualizados y marginados, en procura de establecer conexiones transversales que integren los barrios populares, conectados verticalmente hasta el momento, a través de redes viales que conducen al centro de la ciudad.

Para aumentar las posibilidades de intercomunicación y convivencia entre sectores vecinos, se requiere con urgencia de soluciones que mejoren el entorno territorial desde el urbanismo social y la sociología urbana: la construcción de viaductos, escaleras y puentes que hagan más amable el territorio; el desarrollo de programas para la prevención de tragedias, desbordamientos, deslizamientos e inundaciones; la limpieza y el ornato de las quebradas; el manejo de residuos, entre otras. Tales iniciativas deben apoyarse en programas con amplia participación de la comunidad para el mejoramiento del hábitat, el cuidado del territorio, de las zonas verdes y biodiversidad urbana, y la creación de cultura ecológica; deben propiciar el afianzamiento de los vínculos entre los habitantes e incluir a la población vulnerable, especialmente a la gente joven, en la construcción de alternativas dignas de ingresos, educación y recreación, que permitan desactivar desde su origen las manifestaciones de violencia a la que son proclives los guerreros ilegales.

El planteamiento popularizado en los medios masivos de comunicación, que el microtráfico es la expresión del narcotráfico en las ciudades, es un sofisma de distracción. Es incontrovertible que las grandes organizaciones narcotraficantes detentan el control de las rutas, relaciones, transacciones, contactos internacionales, canales de exportación, logística y poder intimidatorio para imponer su dominio so-



bre los que siempre han sido los dueños de las plazas de vicio, nombre real y más sincero que el de microtráfico que no pasa de ser un eufemismo lingüístico. La única opción para superar definitivamente la narcoactividad es la legalización del consumo e incluso de la producción de drogas en todos los ámbitos. Un ejemplo fehaciente de la efectividad de ello es lo acaecido con la prohibición del alcohol en Estados Unidos a principios del siglo XX. Esta medida draconiana no sólo fue inefectiva, sino que sumió a la sociedad estadounidense en la violencia y la corrupción estatal generalizada.

Empero, aún la legalización de los estupefacientes sería insuficiente para prevenir la violencia debido a que Colombia carece de una perspectiva de largo plazo fundamentada en una política pública de paz social, que oriente la inversión estatal para incluir a la población vulnerable, especialmente a los jóvenes; una política que fortalezca la institucionalidad de la paz, que genere confianza, viabilice los pactos de no agresión y quite sin más trauma el agua a los actores de la violencia. El trabajo necesario para resolver una situación generada por años de inequidad, violencia y atroces desarraigos, exige un compromiso transgeneracional que sólo puede garantizar un Estado seriamente comprometido con el bienestar y la seguridad de su población.

Lo anterior nos exige preguntar si lo que actualmente realiza el Estado colombiano es efectivo para erradicar definitivamente la violencia que hoy conocemos. Al menos en Medellín, la estrategia está centrada en actos mediáticos, conciertos, incluso muy meritorios, como el de Juanes en la Comuna 13, actos culturales de músicos y gestores populares de la cultura, todo enfocado hacia la diversión y el "city marketing".

Una Política de Paz debe resolver positivamente el cuestionamiento recurrente expresado en preguntas como: ¿El Estado hace lo correcto para garantizar que la paz sea cotidiana en el largo plazo? ¿La organización estatal

corresponde a una institucionalidad que promueve y concreta la paz? ¿Las diferentes Secretarías de las entida-



des territoriales se integran para optimizar los recursos y garantizar los mejores y oportunos resultados que favorezcan a la población más vulnerable? ¿Se trabaja de manera articulada para superar el protagonismo de los departamentos, para evitar la duplicidad de inversiones y el despilfarro de recursos? ¿Está toda la institucionalidad comprometida para que el drama del hambre deje de lastrar la existencia de las personas?

Es evidente que la solución a los problemas planteados exige una acción integral e integradora por parte del Estado para atacar las causas de la inequidad y de la violencia; se requiere una acción que oriente de manera articulada los recursos en función de una paz real y en compromiso con el respeto pleno de todos los derechos humanos, y que determine desde estos objetivos qué, cómo, cuándo, dónde y con quién invertir. Una acción que privilegie la intervención integral en el territorio para promover la armonización de la arquitectura, el urbanismo social, la sociología urbana, la ingeniería y el conjunto de ciencias y tecnologías requeridos por la construcción

y resignificación de un hábitat humanista, armónico y armonizador de las personas y comunidades. La decisión del Estado tiene que estar siempre a favor de la gente, de modo tal que por lo menos no se pueda impedir, desde posiciones legales, la inversión pública en zonas de alto riesgo, ya que donde precisamente se debe aplicar el poder constructivo del Estado, es en las zonas donde la población más vulnerable lo requiere, o sea aquellos barrios formados por desplazados y expulsados a la fuerza de su tierra o propiedad rural.

En el caso de Medellín, es fundamental realizar esta inversión pública en los sectores populares si en verdad se quiere superar el proceso histórico de partición que caracteriza la ciudad. Así como en la administración del alcalde Sergio Fajardo se construyeron meritorios Parques Biblioteca en zonas de alto riesgo, igual se debe invertir en viviendas y espacio público en estas mismas áreas estigmatizadas y empobrecidas, con una visión urbanística que permita la superación del manejo fragmentador del territorio impuesto por los actores armados ilegales y el mismo modelo de desarrollo excluyente y marginalizante.

El trabajo de la administración pública sólo será sostenible y duradero si se logra que puedan prosperar empresas productivas en los barrios, comunas, veredas y corregimientos; empresas que aporten empleo digno, cumplan sin restricción con la legalidad, generen riqueza social a partir de productos y servicios competitivos incluso en los mercados internacionales, contribuyan a la creación de referentes sociales centrados en el respeto absoluto a los derechos humanos y propicien sin ambigüedad el empoderamiento de una base social digna, conformada por sujetos educados con altos niveles de conciencia, autoestima, oportunidades y corresponsabilidad social.

Para erradicar la guerra de la sociedad y específicamente de Medellín, las acciones de la Secretaría de Cultura Ciudadana deben estar orientadas a

sensibilizar a la población sobre los impactos de la guerra, no sólo en el tejido social y la vida de cada una de las personas, sino también en la biósfera, la biodiversidad y los ecosistemas. En lo posible, los actos culturales deben promover la conciencia sobre los efectos atroces de la guerra, con el fin de que el rechazo a todo asesinato se vuelva un imperativo para cada uno, máxime si se trata de menores, como ocurrió durante el mes de agosto de este año con 14 jóvenes de los barrios de Medellín (crímenes que hubieran conmocionado a cualquier ciudad del mundo o a cualquier gobierno local, menos en Medellín y Colombia); pero todo indica que en esta ciudad, la crisis humanitaria no importa, como tampoco el número tan elevado de crímenes, básicamente de jóvenes entre los 14 y 26 años.

Para lograr que la paz sea duradera, es necesario erradicar para siempre la aguda pobreza y la exclusión que lastran el destino de al menos la mitad de la población de Colombia. Si se logra este noble propósito, se fortalecerá como nunca antes la democracia participativa y pasará para siempre a la historia el Estado mendicante y limosnero que tornó a su pueblo en miserable para que los detentores del dinero allegaran votos sin ninguna dificultad. De no acabar con la pobreza, la exclusión y la inequidad, la población empobrecida seguirá con las ventas de sus votos, sea a cambio de dinero, alimentos, subsidios, agua potable o electricidad, o seguirá siendo caldo de cultivo de la ilegalidad en todas sus formas y camuflados, incluyendo la impunidad y la corrupción que, a la final, siempre benefician la guerra.

Es claro que existe desarticulación entre las actividades del Estado en todos sus niveles de organización, una crisis estructural que impide a vastos sectores de la sociedad la superación de los niveles de desigualdad y pobreza. Mientras estas situaciones se mantengan, subsistirán los territorios que propician la discriminación y el fraccionamiento, el mercado capitalista, liberado a sus anchas, seguirá

imponiendo su ánimo de lucro hasta en lo más esencial para la vida de la población, pervivirá la actividad delincuencial que le es consustancial, prosperarán los grupos armados ilegales y continuará vigente el conflicto urbano, también permanecerán la inequidad y consecuente exclusión de vastos sectores de la población y se seguirá magnificando la degradación del medio ambiente con todas las nefastas consecuencias para el presente y el futuro de la gente y la biósfera en su conjunto.

Medellín, como otras ciudades colombianas, está reciclando una nueva generación de actores del conflicto urbano, lo cual implicará muy probablemente otros 20-25 años para solucionar el más grave de los asuntos actuales en esta ciudad y en los principales centros urbanos del país...

¿En este contexto, tendrá sentido humanista acometer un conflicto urbano que se está reciclando; analizarlo y solucionarlo por la vía democrática? ¡La historia nos lo dirá!

Medellín, noviembre de 2010



Notas

¹A diferencia de lo que acontece en las guerrillas donde el cambio de los mandos es lento y obedece a una estructura preestablecida para el reemplazo de todo mando superior en caso de bajas y reveses en la confrontación.